

Doce hombres con piedad

Las vísperas se había hablado de ruptura de demócratas más que de ruptura democrática. Un clima poco propicio, ciertamente, para la sesión de la "comisión de enlace" que debería celebrarse en Valencia durante el fin de semana. Dos días antes se había producido el enfrentamiento abierto entre el PSOE y García Trevijano. Un comunicado del PSOE —como respuesta a unas críticas de García Trevijano— descalificaba a éste moral y políticamente. Enrique Múgica se levantó de la reunión de Coordinación Democrática después de salir elegido García Trevijano —junto a Simón Sánchez Montero— como delegado para la "comisión". Por otra parte, el documento Ollero había creado una cierta confusión. Este documento sobre el proyecto Suárez pretendía unir las firmas de partidos de Coordinación junto a otros liberales y socialdemócratas no integrados en ella en una propuesta que resultaba contradictoria con el texto de Coordinación Democrática sobre el reformismo Suárez. Tras numerosas reuniones, Coordinación Democrática ha conseguido "normalizar" el documento Ollero hasta el punto que mal puede llamarse así este texto si no es por razones de paternidad histórica.

Esto en Madrid. En Cataluña los partidos de la derecha del Consell

siguen negándose a participar en un organismo unitario de la oposición. Sin embargo, la Asamblea decidió, por mayoría abrumadora, enviar dos delegados a la comisión de enlace. En Galicia, el Consello anunció que no asistiría a Valencia. La Taboa, por el contrario, asistió. En Andalucía, el PSA y otros dos partidos pretenden que su región esté representada de forma específica en las reuniones de carácter estatal. Enviaron un delegado a Valencia para protestar. En el País Vasco la formación en proceso avanzado de un Consejo Nacional Vasco permitirá —según parece, pronto— la presencia de Euskadi en un colectivo de la oposición.

Articular un Estado democrático

Si ciertos partidos tienen capacidad de autocrítica deberían hacerla a la vista de lo conseguido en Valencia por esta "comisión de enlace", por estos doce hombres con piedad y con más paciencia que un santo. Si las conclusiones de Valencia son aprobadas en los diversos organismos unitarios —en las llamadas instancias—, habrá culminado prácticamente el proceso de unidad. La oposición democrática podrá presentar una alternativa,

tendrá un programa. Son días estos en que se juegan mucho los demócratas.

La oposición no ha tenido las cosas fáciles. Ha tenido que responder al doble reto del poder y de su propio desmigajamiento. Se ha visto tolerada en unos momentos de práctica antidemocrática. Precisamente en este fin de semana era detenido Javier Ortiz, del Movimiento Comunista y del secretariado de Coordinación Democrática; en Tenerife, una vez más, la Policía mata a un hombre que nada tenía que ver con el objetivo que perseguía, "El Rubio"; en el País Vasco continúa y crece la tensión por no habersele concedido una amnistía plena. Por otro lado, la oposición celebra una reunión tras otra para racionalizar la jungla de siglas, de partidos, de plataformas. Pero, además, la oposición española se encuentra con la difícil papeleta, o, mejor misión histórica, no sólo de plantear una alternativa al poder en un Estado hecho como en los países donde el Estado está hecho y bien hecho, sino que tiene que esbozar en esa respuesta el esquema de un Estado democrático. No sólo tiene que articularse como tal oposición, sino esbozar la articulación de un Estado democrático. El problema de las nacionalidades y regiones está perturbando el proceso de unidad y articulación, no porque

la oposición se invente ese problema, sino porque existe enmascarado y negado. Otro problema es si todos los grupos de oposición entienden lo mismo cuando se habla de autonomía, federalismo, nacionalidad, región, etcétera.

Resultaba patético contemplar a los doce hombres de la comisión de enlace, reunida en Valencia. Sobre sus hombros pesaba ese problema —dramático— "de España".

El escollo principal

La reunión de la comisión de enlace en Valencia va a suponer un salto importante en el proceso de racionalidad en que está metida la oposición desde hace un año. Si sus conclusiones consiguen la aprobación, el fruto será un colectivo único para la inmensa mayoría de la oposición democrática. El sábado conoceremos el resultado.

El orden del día sobre el que trabajó la comisión tenía dos partes. Por un lado, la discusión de un programa político unitario de ruptura democrática que abra un período constituyente sobre las bases de las libertades democráticas, la libertad sindical, la amnistía sin exclusiones, los derechos políticos de las nacionalidades y regiones. En segundo lugar, un proyecto de arti-



"Comisión de enlace": Simón Sánchez Montero (PCE) y A. García Trevijano (GDI), por Coordinación Democrática; Marzal (Convergencia Socialista de Catalunya) y Jossop Benet (Asamblea de Intelectuales), por Asamblea de Catalunya; Carlos Dolz (MC) y Doró Balaguer (PCE), por la Taula valenciana; Angel Guerreiro (PCG) y Andrés Eguivar (FSG-PSOE), por la Taboa gallega; Díaz de Aguilar (GDI) y José Carlos Mauricio (PCE), por la Coordinadora de Fuerzas Democráticas de Canarias; Néstor Torres (PCE) e Isidre Forteza (MC), por el Consell de les Assemblees de les Illes. La elección en cada una de las plataformas arrojó la sorpresa de cinco miembros del PCE en la comisión. La cosa no ha hecho gracia a los propios comunistas.

culación unitaria a nivel de Estado de todas las plataformas de la oposición democrática.

Doce horas de trabajo costó el pleno acuerdo sobre la formulación de un programa político de alternativa y sobre la formación de una plataforma común. La rueda de prensa defraudó a los periodistas, ya que la comisión se limitó a enunciar las líneas maestras del acuerdo. Se adujeron razones de cautela y de respeto a los organismos allí representados.

Obviamente, el escollo principal que la comisión debía salvar era el reconocimiento de los derechos autonómicos. El problema planteado por la Taula valenciana se ha resuelto de tal modo que se reconocen sus exigencias sin contradicción con los postulados de Coordinación Democrática. Por fuentes indirectas, en los pasillos del hotel, pudimos conocer los términos en que se ha formulado lo que consistía el punto de mayor conflictividad: reconocimiento de las aspiraciones a estatutos de autonomía de las nacionalidades y regiones que lo reivindiquen y que se doten de la organización política adecuada para garantizar su proceso autonómico durante el período constituyente del Estado, restableciendo provisionalmente para los casos específicos de Cataluña, Euskadi y Galicia los principios e instituciones configurados en sus Estatutos aprobados y plebiscitados.

Los otros puntos del texto elaborado en Valencia serían la formación de un Gobierno, legalización de partidos y sindicatos, el reconocimiento de las libertades, la amnistía sin exclusiones, un programa económico contra la inflación y el paro, la derogación de todas aquellas leyes que se oponen a estos principios...

Si estas conclusiones son aprobadas, difícilmente podrá dejar de integrarse el Consello gallego o, al menos, el Partido Socialista Galego, que forma parte de FPS. Y difícilmente podrán esquivar el colectivo unitario los partidos de derecha del Consell catalán. Marzal, de Convergencia Socialista, fue terminante: "Los Intereses de Cataluña pasan por aquí y no por extraños contactos de negociación con el Gobierno. El resultado nos reafirma en el acierto de nuestra posición y esperamos que sirva para un replanteamiento de aquellos que piensan lo contrario". Y Benet, de la Asamblea de Intelectuales: "Si el Consell hubiera estado aquí no habría tenido que renunciar a nada. El programa del Consell es prácticamente el mismo de la Asamblea, y nosotros no hemos tenido que renunciar a nada".

El sábado sabremos si la oposición democrática ha estado a la altura del desafío. Su credibilidad —la colectiva, no la de cada partido— está a prueba en estos momentos.

C. ALONSO DE LOS RIOS.



Prensa

Las maniobras del doctor

POR qué un editor de publicaciones médicas decide aventurarse de pronto en el azaroso campo de la información general y no obstante fracasar una y otra vez se empeña en registrar y lanzar nuevos títulos a un mercado cada día más difícil?

¿Ambiciones políticas? ¿Simple megalomanía? ¿O acaso por un afán solidario y patriótico de crear nuevos puestos y contribuir a aliviar así el problema del paro? Tan romántica visión no parece cuadrar, sin embargo, con la realidad de una empresa cuyos representantes legales son, desde hace años, visitantes asiduos de la Magistratura de Trabajo.

Por su parte, los casi cuatrocientos empleados —administrativos, personal de talleres y periodistas— amenazados desde comienzos de mes por la suspensión de pagos y el expediente de crisis solicitado por Publicaciones Controladas-Ficheros Médicos y Julio García Peri Editor, tienen otras sospechas. La continua inscripción de nuevos títulos y su lanzamiento en condiciones paradójicamente precarias sería una operación montada por el doctor García Peri para, en un momento de recesión de la publicidad farmacéutica, su principal fuente de ingresos, crear una impresión de confianza y obtener más fácilmente nuevos créditos con que enfrentarse al progresivo endeudamiento. La operación habría acabado torciéndose: a partir de julio pasado, la Papelera iba a negarse a seguir suministrando papel, y la Banca, a conceder nuevos créditos.

De hecho, las cosas comenza-

ron a tomar mal cariz con la incorporación, el último marzo, del periodista Martín Ferrand como vicepresidente de Publicaciones Controladas. Martín Ferrand, que acababa de dejar "Nuevo Diario" tras el cerrojazo de la empresa, era un viejo conocido de la casa y hombre de confianza de García Peri. Director por un día del abortado "Nivel", había estado también al frente de otras experiencias malogradas del doctor: la publicación en fascículos de "Los españoles" y el semanario "Telesiete". A la vista de tales antecedentes, las palabras atribuidas al periodista en su toma de posesión —"Vengo a sanear la empresa"— no resultaban precisamente tranquilizadoras.

La primera manifestación de la nueva política empresarial de saneamiento fue el cierre del semanario "Realidades" cuando sólo llevaba tres meses en los quioscos (ver TRIUNFO número 695). Los trabajadores de las restantes publicaciones no médicas —"Gaceta del Arte", "Doblón", "Historia Internacional" y el también neonato "Diario Económico"— vieron entonces las orejas al lobo.

No dejaba de ser inquietante, por otro lado, el que el doctor García Peri hubiese decidido poco antes desvincular legalmente el diario "Noticias Médicas" y la revista "Acta Ginecológica", de las que era editor a título personal, del resto de las publicaciones. ¿Trataba acaso de poner a salvo de la catástrofe que se avecinaba a dos de las publicaciones que habían ofrecido siempre mayor rentabilidad? ¿Intentaba Julio García Peri Editor convertirse en

posible acreedor de Publicaciones Controladas?

Sea como fuere, a partir de finales de junio los temores comenzaron a verse confirmados. Los numerosos colaboradores de las publicaciones de la empresa empezaron a recibir cheques sin fondos. Para los trabajadores de plantilla, la sorpresa llegaría a la vuelta de las vacaciones. Las publicaciones, tanto las médicas como las de información general, no podían reaparecer por falta de papel, mientras que a ellos tampoco se les abonaba la nómina de agosto. El Banco Coca, principal acreedor de Publicaciones Controladas, había cerrado por fin el grifo.

Pero García Peri no había perdido el tiempo. Lejos de dedicarse a descansar en su chalet de 300 millones de la Moraleja, había aprovechado el mes de agosto para preparar concienzudamente el expediente de crisis y la suspensión temporal de pagos que ahora acaba de solicitar y sobre los que todavía los interventores judiciales no se han pronunciado.

Siguen mientras tanto sin cobrar un duro tanto los colaboradores como los casi cuatrocientos trabajadores de plantilla, quienes pasan el día entre asambleas, visitas a Magistratura y a sindicatos y a sus compañeros de otras publicaciones, en busca de ayuda económica.

Ahora temen que, haciendo valer sus derechos, el Banco Coca pueda quedarse a la vez con la imprenta y con Publicaciones Controladas. Sería una nueva batalla perdida. Perdida, como siempre, por la prensa. ■ JOAQUIN RABAGO.